Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus razonamientos 8° y 10° que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que el asunto a dilucidar consiste en determinar si constituye una actuación arbitraria o ilegal la decisión adoptada por el Director de la Escuela de Formación de Carabineros, a través de la Resolución Exenta N° 238 de 7 de febrero de 2018, de suspender hasta por el término de dos años, a la Alumna Carabinero recurrente de su participación en el Curso de Formación, luego que ésta informara que se encuentra embarazada y con cinco semanas de gestación.

Segundo: Que, al informar, la recurrida sostuvo que no incurrió en arbitrariedad, pues la decisión fue adoptada velando por el bienestar del que está por nacer, derecho que colisiona con el derecho a la educación de la Carabinero Alumna recurrente, existiendo preeminencia del primero sobre el segundo, desde que el Curso de Formación de Carabineros contempla altas exigencias físicas, con ramos eminentemente prácticos que son indispensables para la instrucción del personal, como acondicionamiento físico, defensa personal, arma y tiro policial. Asegura que la solicitud realizada por la actora en cuanto a que se le otorgue el mismo tratamiento de los alumnos lesionados no

resulta posible, al tratarse de situaciones que no son equivalentes, desde que los alumnos lesionados han sido sujetos de un suceso eventual que provoca un daño involuntario, por lo que niega haberle dispensado un trato discriminatorio. Explica que la actora ha sido suspendida por dos años, pero mantiene su calidad de alumna e imponente de DIPRECA, percibiendo asignación mensual, excluyéndose únicamente las prestaciones de seguridad social asociadas al embarazo, puesto que las mismas sólo corresponden al personal de planta de la Institución.

Tercero: Que, para dimensionar adecuadamente el conflicto constitucional que se plantea, cabe señalar que el artículo 1° de nuestra Carta Fundamental prescribe que "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Agrega su inciso cuarto que "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece."

Resulta pertinente destacar, antes de continuar la exposición normativa, que esta norma es fundamental para nuestro ordenamiento jurídico, porque representa una fuente de derechos y una herramienta de interpretación, desde que

de su lectura, en primer lugar, se extrae la idea esencial que rige y sostiene nuestra Constitución Política, esto es, que las personas constituyen un fin en sí mismo y emanan los conceptos de dignidad, libertad e igualdad de la cual gozan y, en segundo término, se extrae la premisa, en virtud de la cual, el Estado se constituye en un garante del resguardo de dichos derechos, para lo cual deberá proporcionar al individuo las herramientas necesarias dirigidas a preservarlos.

En ese orden de ideas, el artículo 5° inciso segundo de la Constitución reafirma lo expuesto, sobre la base de prescribir que: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Dentro de los derechos esenciales garantizados expresamente por nuestra Carta Fundamental, pertinentes en el caso de autos, se encuentran, justamente, el derecho a la vida, integridad física y psíquica y la protección de la vida del que está por nacer, la igualdad ante la ley - como el mecanismo esencial para proscribir la no discriminación de las personas-, así como el derecho a la educación, contemplados en el artículo 19 numerales 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República.

En armonía con la normas constitucionales antes reseñadas, el artículo 11 del D.F.L. N° 2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 sobre Ley General de Educación, en lo pertinente, dispone *"El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos"*.

Cuarto: Que es importante añadir la normativa internacional dictada sobre la materia, que ha obligado al Estado a resguardar y promover la no-discriminación en favor de la mujer.

En efecto, el artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 diciembre de 1979, ratificada por Chile a través del Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 789 del año 1989, declara: *"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres..."*

Por su parte, el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, declara: "1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular..

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico..

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales..

d) *Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella*".

Quinto: Que, analizando los hechos fundantes del recurso a la luz de las normas constitucionales y legales antes transcritas, es posible concluir que la medida dispuesta por el Director de la Escuela de Formación de Carabineros, a través de Resolución Exenta N° 238 de 7 de febrero del año, en orden a disponer la suspensión del proceso de formación de la recurrente hasta por el periodo de dos años, fundado en que su estado de gravidez no le permite dar cumplimiento al Plan de Estudio respectivo, resulta una medida ilegal y que afecta el derecho a la igualdad y educación de la recurrente en su esencia, desde que importa dispensar un trato discriminatorio por motivo de su embarazo, que menoscaba el desarrollo educativo de la recurrente, y con ello, el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

En efecto, imponer a la recurrente la suspensión de hasta dos años en su proceso de formación, sólo por encontrarse embarazada, circunstancia a la que naturalmente los alumnos hombres no se verán enfrentados, es una decisión que no resulta neutra desde el punto de vista del respeto al derecho a la igualdad al que se encuentran obligados todos los órganos del Estado, y por cierto el recurrido, pues ello importan indefectiblemente un

menoscabo en el desarrollo académico de la Alumna Carabinero embarazada, quien verá demorado el cumplimiento de su Plan de Estudio, con los subsecuentes efectos en su carrera funcionaria en la Institución, circunstancia que importa dispensar un trato discriminatorio contra la actora, únicamente en consideración a su condición de mujer embarazada, proceder que, desde luego, vulnera la normativa constitucional antes aludida.

Por el contrario, el estándar en el cumplimiento de los derechos fundamentales fijados por la normativa constitucional en referencia, impone al Estado y a sus órganos "*Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella*", que fue precisamente la justificación esgrimida por la propia recurrida, sin que el embarazo y la maternidad en ningún caso pueda constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, siendo deber de estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos, como lo dispone el artículo 11 del D.F.L. N° 2 sobre Ley de Educación.

La conclusión antes descrita, es la misma que se encuentra contenida en el artículo 202 del Código del Trabajo, que confiere a la trabajadora embarazada el derecho al cambio de funciones cuando realiza trabajos

riesgosos o pesado, que pudieran afectar su embarazo, sin que ello pueda dar lugar a una merma de sus remuneraciones, todo ello, en la tradicional perspectiva del Convenio N° 183 de la OIT sobre la materia, hipótesis normativa que bien puede ser asimilada a la situación académica de la recurrente.

Sexto: Que, en consecuencia, el pleno respeto de los derechos fundamentales de la actora, en su condición de mujer embarazada, imponía a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile adoptar las medidas que fueran necesarias, para, por una parte, respetar los derechos de igualdad y educación de la Alumna Carabinero recurrente, y por otra, otorgar la debida protección del que está por nacer, realizando los cambios al Plan de Estudios que sea consistente con el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la actora y que no importe un menoscabo en su desarrollo académico y profesional, por el sólo hecho de encontrarse embarazada.

Con todo, la modificación al Plan de Estudios del Curso de Formación que recoja las particularidades de las alumnas embarazadas, se ajusta a los requisitos que impone el principio de proporcionalidad que rige la materia. En efecto, resulta una medida que persigue una finalidad legítima -la protección del que está por nacer y el derecho a amamantamiento del niño recién nacido-; adecuada o idónea para la promoción de dicho objetivo; necesaria, por lo que

debe preferirse de entre varias alternativas de intervención, como sería la suspensión de la alumna hasta por dos años dispuesta por la Institución recurrida, por afectar en menor medida los derechos fundamentales de la actora y resguardar igualmente el deber de protección del no nato y los intereses de Carabineros de Chile. Y, finalmente, por satisfacer el criterio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, la gravedad de la intervención -medida adoptada por la Escuela de Formación de Carabineros- ha de ser la adecuada al objetivo de la intervención, sin afectar los derechos de la recurrente en su esencia o en la menor medida posible.

Séptimo: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, al no adoptar los ajustes al Plan de Estudio respectivo que permitiera a la actora continuar con su proceso educativo, considerando todas las particularidades de la Alumna Carabinero embarazada que ha recurrido, lo que importa dispensar un trato discriminatorio que sólo afecta a las Alumnas Carabineros mujeres, que conlleva un menoscabo en su proceso de formación.

Octavo: Que, en consecuencia, resulta del todo ilegal que la recurrida suspenda por hasta dos años a la Alumna Carabinero por la sola circunstancia de encontrarse embarazada, con consecuencias tan definitivas para ella en sus derechos, resultando imperativo exigir a la recurrida

un mínimo de diligencia en su proceder y respeto por los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en la labor que realiza, por lo que la sentencia apelada deberá ser revocada, para los efectos que se dispondrán en lo resolutivo.

Y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, **se revoca** la sentencia apelada de siete de agosto de dos mil veinte, y en su lugar se declara que **se acoge** el recurso de protección deducido en contra del Director de la Escuela de Formación de Carabineros Chile, institución que deberá diseñar un Programa de Formación que considere todas las particularidades de la mujer en estado de gravidez y lactancia, evitando generar con aquél, menoscabos a las Alumnas Carabineros que se encuentren en esa condición.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

Rol N° XXXX-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Pedro Pierry A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante Sr. Pierry por estar ausente. Santiago, 23 de noviembre de 2020.